JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 4 DE VALENCIA

Procedimiento Ordinario [ORD] - 000498/2021

Actor: [REDACTED]

Letrado/ Procurador: [REDACTED]

Demandado: DIPUTACION DE VALENCIA

Letrado/ Procurador:

Sobre: Administración Corporativa

SENTENCIA nº 101/2022

En Valencia, a veintinueve de abril de dos mil veintidós.

D^a. Lourdes Noverques Martínez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 4 de Valencia, ha visto los presentes autos de procedimiento ordinario seguidos ante este órgano judicial con el número 498 del año 2021, a instancia de [REDACTED], representada y asistida por el [REDACTED], contra la providencia número 161319, dictada, en fecha trece de octubre de dos mil veintiuno, por el Jefe de Servicio de Gestión Tributaria de la Diputación Provincial de Valencia, por la que se acordaba inadmitir el recurso de reposición interpuesto frente a la diligencia de embargo dictada frente a la aquí demandante por reiteración del recurso y, así, por cuanto *“el recurso de reposición interpuesto ya fue resuelto en su día mediante la oportuna Providencia de la Tesorería. A la vista de lo dispuesto en el artículo 14.2.ñ) del Real Decreto Legislativo 2/2004, contra la resolución del recurso de reposición no puede interponerse de nuevo este recurso, pudiendo los interesados interponer directamente recurso contencioso-administrativo, todo ello sin perjuicio de los supuestos en los que la ley prevé la interposición de reclamaciones económico-administrativas contra actos dictados en vía de gestión de los tributos locales”*, habiendo comparecido como parte demandada la referida Diputación Provincial de Valencia, representada y asistida por la Letrada [REDACTED].

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Letrado [REDACTED] en representación y defensa de [REDACTED] se interpuso recurso contencioso-administrativo frente a la providencia número 161319, dictada, en fecha trece de octubre de dos mil veintiuno, por el Jefe de Servicio de Gestión Tributaria de la Diputación Provincial de Valencia, por la que se acordaba inadmitir el recurso de reposición interpuesto frente a la diligencia de embargo dictada frente a la aquí demandante por reiteración del recurso y, así, por cuanto *“el recurso de reposición interpuesto ya fue resuelto en su día mediante la oportuna Providencia de la Tesorería. A la vista de lo dispuesto en el artículo 14.2.ñ) del Real Decreto Legislativo 2/2004, contra la resolución del recurso de reposición no puede interponerse de nuevo este recurso, pudiendo los interesados interponer*

directamente recurso contencioso-administrativo, todo ello sin perjuicio de los supuestos en los que la ley prevé la interposición de reclamaciones económico-administrativas contra actos dictados en vía de gestión de los tributos locales”, tras cuya admisión a trámite y recibido el expediente, se dio traslado del mismo a la parte recurrente para deducir la oportuna demanda, lo que hizo mediante escrito en el que terminaba solicitando que “teniendo por presentado este escrito, se digne admitirlo, se tenga a esta parte por ratificada en la demanda ya presentada interponiendo el presente recurso de fecha 28 de diciembre de 2021 y por consiguiente tener por evacuado el trámite de presentación de la demanda”, siendo que en el aludido escrito presentado en fecha veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimaba de pertinente aplicación, terminaba interesando lo siguiente: “Que teniendo por presentado este escrito, se digne admitirlo, tener por interpuesto en tiempo y forma recurso contencioso administrativo contra la resolución dictada por la Diputación de Valencia inadmitiendo recurso de reposición, y tres los trámites legales oportunos, se dicte en su día sentencia, por la cual se declare la nulidad del acto administrativo impugnado, ordenando a la administración demandada resolver sobre el recurso de reposición interpuesto”.

SEGUNDO.- Mediante diligencia de ordenación de fecha tres de marzo de dos mil veintidós se acordó dar traslado a la Administración demandada a los efectos de que presentara su escrito de contestación a la demanda si lo considerara procedente, siendo, así, que la Letrada de la Diputación Provincial de Valencia presentó el aludido escrito de contestación a la demanda, en el que, tras exponer los argumentos que estimaba pertinentes, terminaba solicitando lo siguiente: “Que por presentado este escrito tenga a bien admitirlo y dicte sentencia que confirme la resolución dictada, esto es la que inadmite el recurso de reposición interpuesto”.

TERCERO.- En virtud de decreto de fecha dieciocho de marzo de dos mil veintidós se fijó la cuantía del presente procedimiento en indeterminada, siendo que, al no haber sido interesado por las partes la celebración de vista ni la presentación de conclusiones escritas, se declaró, sin más trámite, el pleito concluso para sentencia, lo que se verifica a través de la presente.

CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento se han respetado todas las prescripciones legales, a excepción de la relativa al plazo para dictar sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Conforme ha quedado anteriormente señalado, el objeto del presente recurso contencioso-administrativo viene constituido por la providencia número 161319, dictada, en fecha trece de octubre de dos mil veintiuno, por el Jefe de Servicio de Gestión Tributaria de la Diputación Provincial de Valencia, por la que se acordaba inadmitir el recurso de reposición interpuesto frente a la diligencia de embargo dictada frente a [REDACTED] por reiteración del recurso y, así, por cuanto “el recurso de reposición interpuesto ya fue resuelto en su día mediante la oportuna Providencia de la Tesorería. A la vista de lo dispuesto en el artículo 14.2.ñ) del Real Decreto Legislativo 2/2004, contra la resolución del recurso

de reposición no puede interponerse de nuevo este recurso, pudiendo los interesados interponer directamente recurso contencioso-administrativo, todo ello sin perjuicio de los supuestos en los que la ley prevé la interposición de reclamaciones económico-administrativas contra actos dictados en vía de gestión de los tributos locales”, interesando la parte demandante, a través del “suplico” de su escrito de demanda, que se dictara sentencia por la que se declarara la nulidad de la referida resolución administrativa impugnada, ordenando a la Administración demandada la resolución del recurso de reposición interpuesto.

A los anteriores efectos, indicaba la parte demandante en el aludido escrito de demanda que [REDACTED] interpuso un recurso de reposición frente a la providencia de apremio por la que se le embargó la cantidad de quinientos cincuenta y cinco euros con sesenta y seis céntimos (555,66), en virtud de la sanción que le había sido impuesta por tener un perro sin el correspondiente chip, habiendo sido dicho recurso resuelto en sentido desestimatorio por la Diputación Provincial de Valencia y la correspondiente notificación practicada en la persona de [REDACTED] y no de la actora, por lo que, ante la tardanza en tener noticias de la resolución del recurso, ésta se personó en las dependencias de la Administración demandada, donde le comunicaron que la notificación se practicó en la persona referida, por lo que la actora no tuvo conocimiento de tal notificación ni tenía la certeza de que la misma se correspondiera con el recurso por ella interpuesto, procediéndose a entregarle copia de la resolución, con la advertencia de que se le entregaba para su conocimiento.

Asimismo, se indicaba en el escrito instaurador de las presentes actuaciones que, al desconocer la actora que el recurso había sido notificado a persona distinta y que la resolución notificada se correspondiera con el recurso de reposición interpuesto, procedió a interponer un nuevo recurso de reposición que fue inadmitido por ser reiteración de otro ya resuelto, con lo que discrepaba la parte demandante, al considerar que la Administración demandada debió admitir el recurso y resolverlo en el sentido que la misma considerara oportuno, al no haber sido notificado a la persona interesada el anterior recurso. A este respecto, alegaba la parte actora que las Administraciones Públicas, en su relación con los ciudadanos, habían de ser especialmente cuidadosas en todo lo relativo a la notificación de las resoluciones, especialmente en supuestos como el de autos, en el que la interesada era una persona de escasa formación, sin que existiera impedimento alguno para la Administración en admitir a trámite el recurso y resolver sobre lo solicitado.

A la pretensión descrita se opuso la Administración demandada, interesando el dictado de una sentencia desestimatoria del recurso y confirmatoria de la legalidad de la resolución administrativa impugnada, a cuyo efecto alegaba que de adverso no se desacreditaba la correcta motivación de la aludida resolución recurrida, pues el recurso de reposición presentado en fecha veintitrés de marzo de dos mil veintiuno era una reiteración del recurso de reposición presentado en fecha diez de diciembre de dos mil veinte y que fue notificado en fecha catorce de febrero de dos mil veintiuno, concurriendo, por tanto, la causa de inadmisión prevista en el artículo 14.2.ñ) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Así, sostenía la Administración demandada que las referencias efectuadas de adverso a la notificación de la resolución desestimatoria del primer recurso de reposición constituía una desviación del objeto del presente procedimiento, sin perjuicio de lo cual señalaba que del expediente administrativo resultaba que la aludida resolución fue entregada de forma correcta a persona debidamente

autorizada en la Oficina de Correos tras dos previos intentos de entrega en el domicilio de la demandante, habiéndose dado cumplimiento, de esta forma, al artículo 24 de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal, en relación con lo dispuesto en el artículo 36 del Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales, en desarrollo de lo establecido en la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales, conforme a los cuales los envíos certificados podían ser recogidos en la Oficina de Correos por el destinatario o por persona autorizada por aquél, supuesto éste en el que debía presentarse un documento original que lo identificara, además de cumplimentar una autorización firmada por el destinatario y en la que se indicara la persona que lo iba a recoger, acompañando una fotocopia o copia digital de alguno de los documentos del destinatario considerados como válidos para su identificación.

SEGUNDO.- Centrados los términos de la controversia entre las partes, según lo que ha quedado expuesto en el fundamento jurídico anterior, y en orden a su resolución se considera pertinente partir de recordar que, como se indicaba de forma expresa en el escrito iniciador del recurso contencioso-administrativo que nos ocupa, éste se interpuso frente a la resolución dictada en fecha trece de octubre de dos mil veintiuno por el Jefe de Servicio de Gestión Tributaria de la Diputación Provincial de Valencia, por la que se acordaba inadmitir el recurso de reposición interpuesto frente a la diligencia de embargo dictada frente [REDACTED] [REDACTED] por reiteración del recurso, por mor de lo dispuesto en el artículo 14.2.ñ) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y, así, por cuanto frente a la aludida diligencia de embargo ya se interpuso un recurso de reposición, sin que frente a la resolución del mismo pudiera interponerse de nuevo dicho recurso, sin perjuicio de la posibilidad de los interesados de interponer el correspondiente recurso contencioso-administrativo o la pertinente reclamación económico-administrativa en el caso de actos dictados en vía de gestión de los tributos locales, resultando de lo expuesto que la presente sentencia deberá limitarse a examinar si el recurso de reposición interpuesto en fecha veintitrés de marzo de dos mil veintiuno por la aquí demandante fue correctamente inadmitido.

Pues bien, como se desprende del expediente administrativo, [REDACTED] [REDACTED] interpuso, en fecha diez de diciembre de dos mil veinte, un recurso de reposición frente a la diligencia de embargo, que fue resuelto en sentido desestimatorio mediante providencia de fecha catorce de febrero de dos mil veintiuno, al pie de la cual se indicaba expresamente que *“contra este acto, que pone fin a la vía administrativa podrá interponer recuso contencioso-administrativo ante los juzgados de dicha jurisdicción de la provincia de Valencia, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su notificación, en virtud de lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa”*, siendo, así, que contra la indicada resolución del recurso de reposición solo cabía interponer recurso contencioso-administrativo, sin otra excepción que aquellos supuestos en los que la Ley preveía la interposición de reclamaciones económico-administrativas contra actos dictados en vía de gestión de los tributos locales, como así se le hizo saber expresamente a la recurrente con ocasión de la notificación de la aludida resolución de fecha catorce de febrero de dos mil veintiuno, de conformidad con lo dispuesto en el 14.2.ñ) del Real Decreto

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que se pronuncia en los siguientes términos *“Impugnación de la resolución.-Contra la resolución del recurso de reposición no puede interponerse de nuevo este recurso, pudiendo los interesados interponer directamente recurso contencioso-administrativo, todo ello sin perjuicio de los supuestos en los que la ley prevé la interposición de reclamaciones económico-administrativas contra actos dictados en vía de gestión de los tributos locales”*, en coherencia con lo previsto en el artículo 124.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que dispone que *“Contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse de nuevo dicho recurso”*.

Así las cosas, resultaba pertinente la inadmisión acordada en la resolución administrativa impugnada, en cuanto contra la desestimación del recurso de reposición interpuesto contra la diligencia de embargo en fecha diez de diciembre de dos mil veinte solo cabía la interposición de recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, conforme así fue informada la actora por parte de la Administración demandada en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 40.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, según el cual *“Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente”*, siendo, por tanto, conforme a derecho la inadmisión del nuevo recurso de reposición interpuesto contra una resolución ya firme y consentida, lo que conlleva necesariamente la desestimación del recurso contencioso-administrativo que nos ocupa.

A las consideraciones que anteceden no obsta lo alegado por la parte demandante acerca de la deficiente notificación de la reiteradamente aludida resolución de fecha catorce de febrero de dos mil veintiuno, puesto que, como es sabido, los eventuales defectos de notificación de las resoluciones administrativas no afectan a la validez de las mismas, sino a su eficacia, y, por ende, al comienzo, en su caso, de los plazos para impugnarlas, siendo, en cualquier caso, que, a diferencia de lo sostenido por la parte demandante, no consta la existencia de defecto de notificación alguno. En efecto, según resulta del expediente administrativo, la resolución de fecha catorce de febrero de dos mil veintiuno fue entregada en fecha quince de marzo de dos mil veintiuno a la persona de [REDACTED], respecto de la que se dejaba constancia de su DNI, empleándose el término *“autorizada”* en el apartado de *“relación con el destinatario”* y contando, asimismo, la firma del empleado de Correos. Así las cosas, se impone considerar que quien recogió la notificación se encontraba autorizada al efecto por la aquí demandante, toda vez que, estando suficientemente identificada la persona que recogió la notificación, así como la firma del funcionario de correos que la entregó, opera la presunción de legalidad de la actuación administrativa, correspondiendo a la recurrente acreditar que no había autorizado a [REDACTED] para acudir a la oficina de correos a recoger la notificación, a pesar de lo cual ninguna prueba se ha practicado al respecto y, de esta forma, no se ha

interesado la declaración testifical de aquella ni se tiene constancia de que se haya emprendido acción alguna contra ella.

En definitiva, por las razones dadas en los párrafos precedentes, se considera que no cabe alcanzar conclusión distinta a la de desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por ██████████ contra la providencia número 161319, dictada, en fecha trece de octubre de dos mil veintiuno, por el Jefe de Servicio de Gestión Tributaria de la Diputación Provincial de Valencia, por la que se acordaba inadmitir el recurso de reposición interpuesto frente a la diligencia de embargo dictada frente a la aquí demandante por reiteración del recurso y, así, por cuanto *“el recurso de reposición interpuesto ya fue resuelto en su día mediante la oportuna Providencia de la Tesorería. A la vista de lo dispuesto en el artículo 14.2.ñ) del Real Decreto Legislativo 2/2004, contra la resolución del recurso de reposición no puede interponerse de nuevo este recurso, pudiendo los interesados interponer directamente recurso contencioso-administrativo, todo ello sin perjuicio de los supuestos en los que la ley prevé la interposición de reclamaciones económico-administrativas contra actos dictados en vía de gestión de los tributos locales”*, con la consiguiente declaración de conformidad a derecho de la referida resolución administrativa impugnada.

TERCERO.- Conforme ha quedado señalado en el anterior relato de hechos, mediante decreto de fecha dieciocho de marzo de dos mil veintidós se fijó la cuantía del presente procedimiento en indeterminada, no obstante lo cual, siendo que conforme a lo dispuesto en el artículo 41.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, *“La cuantía del recurso contencioso-administrativo vendrá determinada por el valor económico de la pretensión objeto del mismo”*, disponiendo el artículo 42 del mismo texto legal que *“1. Para fijar el valor económico de la pretensión se tendrán en cuenta las normas de la legislación procesal civil, con las especialidades siguientes: a) Cuando el demandante solicite solamente la anulación del acto, se atenderá al contenido económico del mismo, para lo cual se tendrá en cuenta el débito principal, pero no los recargos, las costas ni cualquier otra clase de responsabilidad, salvo que cualquiera de éstos fuera de importe superior a aquél; b) Cuando el demandante solicite, además de la anulación, el reconocimiento de una situación jurídica individualizada, o cuando solicite el cumplimiento de una obligación administrativa, la cuantía vendrá determinada: Primero. Por el valor económico total del objeto de la reclamación, si la Administración pública hubiere denegado totalmente, en vía administrativa, las pretensiones del demandante; Segundo. Por la diferencia de la cuantía entre el objeto de la reclamación y el del acto que motivó el recurso, si la Administración hubiera reconocido parcialmente, en vía administrativa, las pretensiones del demandante”*, debe considerarse que la cuantía del recurso contencioso-administrativo que nos ocupa equivale al importe al que ascendía la diligencia de embargo dictada contra la aquí demandante, esto es, ochocientos setenta y cinco euros con noventa y nueve céntimos (875,99), lo que determina que la cuantía del recurso no exceda de treinta mil euros (30.000,00), y, en consecuencia, que contra la presente sentencia no quepa la interposición de recurso ordinario alguno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81.1.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

CUARTO.- Finalmente, cabe señalar que, de conformidad con lo que aparece previsto en el párrafo 1º del artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, según el cual: *“En primera o única instancia, el órgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho”*, las costas causadas en la tramitación del presente procedimiento correrán a cargo de la parte demandante, con el límite máximo de quinientos euros (500), más el IVA correspondiente en su caso, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 4 del indicado precepto y del principio de moderación, del que se hacen eco diversas sentencias del Tribunal Supremo, como son las de 19 y 25 de febrero de 2010, en atención a la dificultad del asunto y la labor efectivamente realizada en el procedimiento.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación,

FALLO

Que procede desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por [REDACTED] representada y asistida por el Letrado [REDACTED] [REDACTED] contra la providencia número 161319, dictada, en fecha trece de octubre de dos mil veintiuno, por el Jefe de Servicio de Gestión Tributaria de la Diputación Provincial de Valencia, por la que se acordaba inadmitir el recurso de reposición interpuesto frente a la diligencia de embargo dictada frente a la aquí demandante por reiteración del recurso y, así, por cuanto *“el recurso de reposición interpuesto ya fue resuelto en su día mediante la oportuna Providencia de la Tesorería. A la vista de lo dispuesto en el artículo 14.2.ñ) del Real Decreto Legislativo 2/2004, contra la resolución del recurso de reposición no puede interponerse de nuevo este recurso, pudiendo los interesados interponer directamente recurso contencioso-administrativo, todo ello sin perjuicio de los supuestos en los que la ley prevé la interposición de reclamaciones económico-administrativas contra actos dictados en vía de gestión de los tributos locales”*, con la consiguiente declaración de conformidad a derecho de la referida resolución administrativa impugnada.

Las costas causadas en la tramitación del presente procedimiento correrán a cargo de la parte demandante, con el límite máximo de quinientos euros (500), más el IVA correspondiente en su caso.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe la interposición de recurso alguno, por razón de la cuantía del presente procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81.1.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Llévese el original al Libro de Sentencias y devuélvase el expediente administrativo a su órgano de procedencia.

Por esta mi Sentencia, de la que se expedirá testimonio para incorporarlo a las actuaciones, lo pronuncio, mando y firmo; D^a. Lourdes Noverques Martínez, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 4 de Valencia.

PUBLICACIÓN.- La anterior sentencia ha sido pronunciada y publicada por el Magistrado que la dictó el mismo día de su fecha y en Audiencia pública; se incluye original de esta resolución en el libro de Sentencias, poniendo en los autos certificación literal de la misma y se notifica a cada una de las partes; Doy fe.